

MODEL B

Aquest examen consta de 110 preguntes ordinàries i avaluables (de la 1 a la 110), més 10 de reserva (de la 111 a la 120). Si el tribunal acorda l'eliminació d'alguna pregunta de les ordinàries i avaluables, serà substituïda per alguna de les de reserva, i en el mateix ordre.

Este examen consta de 110 preguntas ordinarias y evaluables (de la 1 a la 110), más 10 de reserva (de la 111 a la 120). Si el tribunal acuerda la eliminación de alguna pregunta de las ordinarias y evaluables, será sustituida por alguna de las de reserva, y en el mismo orden.

1. Según la Constitución, se puede ejercer la iniciativa de reforma constitucional por parte:

- a) De los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas.
- b) Del Defensor del Pueblo.
- c) De las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- d) Del presidente del Gobierno.

2. Señale la respuesta incorrecta sobre la naturaleza jurídica de los principios reconocidos en el capítulo tercero del título primero de la Constitución:

- a) Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que las desarrollen.
- b) Informarán la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
- c) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los principios ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- d) Informarán la legislación positiva.

3. Los acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas:

- a) Requieren aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica.
- b) Necesitan ser comunicados, únicamente, al Senado.
- c) Requieren autorización de las Cortes Generales.
- d) Es suficiente que sean comunicados a las Cortes Generales.

4. En relación con la delimitación de competencias, las leyes de armonización:

- a) Solamente se pueden dictar por razones de interés general.
- b) Corresponde únicamente al Senado, por mayoría absoluta, apreciar la existencia de la necesidad de dictar una ley de armonización.
- c) Son, desde un punto de vista formal, leyes orgánicas.
- d) Se dictan exclusivamente sobre materias que son competencia del Estado.

5. ¿Cuál de los siguientes órganos no podrá plantear un conflicto entre órganos constitucionales del Estado ante el Tribunal Constitucional?

- a) El Senado.
- b) El Congreso de los Diputados.
- c) El Consejo General del Poder Judicial.
- d) El Defensor del Pueblo.

6. La autorización de la propuesta del presidente del Gobierno de someter a referéndum una decisión política de especial trascendencia corresponde:

- a) Al Congreso de los Diputados.
- b) A una Comisión Mixta compuesta de igual número de diputados y senadores.
- c) Al Consejo de Ministros.
- d) A las Cortes Generales.

7. ¿Cuál es el plazo máximo para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo desde que se tiene conocimiento de los hechos objeto de la misma?

- a) Ocho meses
- b) Un año.
- c) Tres meses.
- d) Seis meses.

8. Indique la respuesta correcta:

- a) Los ministros crean, modifican y suprimen las secretarías de Estado de sus respectivos departamentos.
- b) Los ministros reciben el apoyo político y técnico de los gabinetes.
- c) Los ministros son nombrados y separados por el presidente del Gobierno.
- d) Los ministros sin cartera no tienen asignados medios materiales ni personales.

9. El régimen electoral de los consejos insulares se regula:

- a) Por su regulación específica.
- b) Por la Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares.
- c) Por el Estatuto de autonomía.
- d) Por la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

10. Según el Estatuto de autonomía, el Gobierno ha de promover la cooperación con territorios y comunidades que tienen vínculos lingüísticos y culturales con las Illes Balears:

- a) Únicamente cuando no sean pertenecientes al Estado español.
- b) Sean o no pertenecientes al Estado español.
- c) Únicamente para preservar el patrimonio lingüístico común.
- d) Únicamente cuando sean pertenecientes al Estado español.

11. En el Parlamento balear, la constitución de los grupos parlamentarios se realizará:

- a) Dentro de los dos meses siguientes a la sesión constitutiva.
- b) Dentro del mes siguiente a la sesión constitutiva.
- c) En la sesión constitutiva, tras la elección de la Mesa y la jura o promesa de acatar la Constitución por parte de los diputados electos.
- d) Dentro de los diez días siguientes a la sesión constitutiva

12. Las interpelaciones al Gobierno de las Illes Balears o a cada uno de sus miembros podrán formularse:

- a) Por parte de diputados y de grupos parlamentarios.
- b) Solamente por parte de grupos parlamentarios.
- c) Solamente por parte de diputados de forma individual.
- d) De forma oral ante el Pleno.

- 13. Según la Ley 1/1993, de 10 de marzo, el Síndic de Greuges de las Illes Balears se relaciona con el Parlamento:**
- a) Mediante el adjunto al Síndic de Greuges.
 - b) Mediante una comisión parlamentaria.
 - c) Mediante la Junta de Portavoces.
 - d) Mediante el oficial mayor.
- 14. El presidente de las Illes Balears no requiere deliberación previa del Consejo de Gobierno:**
- a) Para disolver el Parlamento y convocar anticipadamente elecciones.
 - b) Para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
 - c) Para solicitar dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
 - d) Para plantear la cuestión de confianza ante el Parlamento.
- 15. Según la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, corresponde al Consejo de Gobierno:**
- a) Aprobar, previa delegación del Parlamento, los decretos leyes.
 - b) Manifiestar su criterio respecto de la toma en consideración de los proyectos de ley que le remita la Mesa del Parlamento.
 - c) Ejercer las facultades de coordinación de los consejos insulares.
 - d) Convocar las sesiones del Consejo de Gobierno.
- 16. Indique la respuesta incorrecta. Los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma que realicen exclusivamente funciones de asesoramiento y de consulta no preceptiva se podrán crear:**
- a) Por resolución del titular de la consejería.
 - b) Por acuerdo del Consejo de Gobierno.
 - c) Por reglamento interno.
 - d) Por convenio.
- 17. El Consejo Consultivo de las Illes Balears será consultado preceptivamente:**
- a) En los proyectos de legislación delegada.
 - b) En todo tipo de disposiciones reglamentarias del Gobierno.
 - c) En todas las proposiciones de ley sometidas a debate y aprobación del Parlamento.
 - d) Previamente al planteamiento de conflictos negativos de competencia.
- 18. El mandato de los consejeros electos de los consejos insulares:**
- a) Finaliza el día en que se lleven a cabo las elecciones siguientes.
 - b) Puede finalizar anticipadamente, si así lo determina el presidente previa deliberación del Consejo Ejecutivo.
 - c) Finaliza el día anterior a la fecha en que se lleven a cabo las elecciones siguientes.
 - d) Puede finalizar anticipadamente, si así lo determina el Consejo Ejecutivo.
- 19. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:**
- a) Las entidades públicas empresariales tienen la consideración de ente de naturaleza corporativa de base asociativa con personificación pública.
 - b) Los organismos autónomos son organismos de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada.
 - c) Los consorcios son organismos públicos de naturaleza institucional con personificación pública.
 - d) Los consorcios tienen la consideración de ente de naturaleza corporativa de base asociativa con personificación pública.

20. Según el sistema de distribución de competencias establecido por el Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la submateria de coordinación de la sanidad privada con el sistema sanitario público se encuentra dentro de las competencias:

- a) Inherentes al pleno ejercicio, previstas en el artículo 38 del Estatuto.
- b) De desarrollo legislativo y ejecución, previstas en el artículo 31 del Estatuto.
- c) Ejecutivas, previstas en el artículo 32 del Estatuto.
- d) Exclusivas, previstas en el artículo 30 del Estatuto.

21. Según la Ley de normalización lingüística, el gobierno autonómico ha de facilitar:

- a) Que los alumnos, a través de sus progenitores, puedan elegir la enseñanza en su lengua, sea la castellana o la catalana.
- b) Que la dedicación horaria de enseñanzas en las dos lenguas oficiales sea la misma.
- c) Que los alumnos se puedan separar en centros y grupos diferentes por razón de lengua.
- d) Que los alumnos puedan utilizar normalmente y correctamente las dos lenguas oficiales al finalizar la escolarización obligatoria.

22. En relación con la adhesión de España a las comunidades europeas:

- a) Se produjo el 1 de enero de 1985, con la firma del Tratado de Adhesión.
- b) Fue necesaria la previa reforma del artículo 13.2 de la Constitución para que se pudiese llevar a cabo la adhesión.
- c) El Tratado de Adhesión se autorizó a través de la aprobación de una ley ordinaria.
- d) Se produjo el 1 de enero de 1986.

23. El Consejo de la Unión:

- a) Tiene el monopolio de la iniciativa legislativa en la Unión Europea.
- b) Adopta las normas de derecho derivado con el Parlamento a través del procedimiento legislativo ordinario.
- c) Controla políticamente a la Comisión Europea.
- d) Está formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros de la Unión.

24. En relación con la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

- a) Es un recurso contencioso que pueden interponer los particulares.
- b) La interpone un juez nacional siempre que un particular lo solicite.
- c) Los jueces nacionales siempre están obligados a plantearla.
- d) Puede ser de interpretación o de apreciación de validez.

25. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

- a) Tiene su sede en Luxemburgo.
- b) Es un tribunal internacional al que no pueden acceder los particulares.
- c) Tiene su sede en Estrasburgo.
- d) Solo es competente si previamente se ha reconocido su jurisdicción.

26. Los dictámenes de la Comisión:

- a) Tienen carácter vinculante para sus destinatarios.
- b) Son actos típicos no obligatorios.
- c) Son actos típicos obligatorios.
- d) Se publican siempre en el Diario Oficial de la Unión Europea.

27. Señale qué afirmación es correcta en el ámbito del derecho de la Unión Europea:

- a) Los reglamentos se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.
- b) Las recomendaciones son actos típicos no obligatorios de derecho derivado.
- c) Los reglamentos y las recomendaciones son actos típicos obligatorios de derecho derivado.
- d) Los dictámenes son actos atípicos no obligatorios de derecho derivado.

28. En caso de conflicto entre el derecho de la Unión y el derecho interno:

- a) Prevalece el derecho de la Unión y el derecho interno queda anulado automáticamente.
- b) Prevalece el derecho interno y no se aplica el derecho de la Unión.
- c) Prevalece el derecho de la Unión y el derecho interno queda derogado automáticamente.
- d) Prevalece el derecho de la Unión y no se aplica el derecho interno.

29. El procedimiento legislativo ordinario:

- a) Implica que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo son colegisladores.
- b) Implica que el Parlamento Europeo y el Consejo son colegisladores.
- c) Implica que las normas de derecho derivado las aprueba la Comisión.
- d) Implica que las normas de derecho derivado las aprueba el Parlamento Europeo.

30. La libre circulación de capitales en la Unión Europea:

- a) Implica la prohibición de cualquier restricción a los movimientos de capitales y de pagos entre los Estados miembros.
- b) Se hizo efectiva el 1 de enero de 1985 con la entrada en vigor del Tratado de la Comunidad Europea.
- c) No complementa las otras libertades que configuran el mercado interior.
- d) Implica la prohibición de cualquier restricción a los movimientos de capitales y permite mantener restricciones a los pagos entre los Estados miembros.

31. La política europea de cohesión económica, social y territorial:

- a) Es una competencia exclusiva de la Unión Europea.
- b) Es una competencia complementaria de la Unión Europea.
- c) Es un ámbito en el que la Unión Europea, en aplicación del principio de subsidiariedad, debe coordinarse con los Estados miembros.
- d) Es una competencia compartida entre la Unión Europea y sus Estados miembros.

32. En relación con los principios de actuación regulados en el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señale la afirmación incorrecta:

- a) Las personas sometidas a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/2013 guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
- b) Las personas sometidas a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/2013 pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
- c) Las personas sometidas a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/2013 ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la concreta finalidad para la que fueron otorgados, o con cualquier otra finalidad de interés público.
- d) Las personas sometidas a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/2013 no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.

33. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información sujeta a las obligaciones de transparencia:

- a) Será comprensible y de acceso fácil, aun pudiendo establecerse que el acceso sea de pago.
- b) No es necesario que se suministre por medios o formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles para personas con discapacidad.
- c) Solo excepcionalmente deberá ser publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web.
- d) Será comprensible, de acceso fácil y gratuito.

- 34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la aplicación de límites al derecho de acceso a la información pública:**
- a) Será meramente potestativa para el órgano administrativo que posea la información.
 - b) Será proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, pero sin necesidad de que esté justificada.
 - c) No debe atender a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
 - d) Será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto.
- 35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las entidades sin personalidad jurídica:**
- a) En ningún supuesto pueden estar obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
 - b) Podrán elegir si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, pero una vez hayan elegido no podrán modificar su elección.
 - c) Podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas.
 - d) Están en todo caso obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- 36. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:**
- a) La información institucional y de los servicios incorporada en la sede electrónica será veraz y deberá ser actualizada cada cinco años.
 - b) No es necesario que la sede electrónica contenga el acceso al registro electrónico.
 - c) La sede electrónica contendrá un enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público que permitirá el acceso a los perfiles de contratante de todos los órganos de contratación incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 113/2010.
 - d) El acceso a la sede electrónica requerirá siempre la utilización de alguna modalidad de firma electrónica.
- 37. De conformidad con el artículo 21 del Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos, la aportación diferida de documentación:**
- a) Es posible en cualquier procedimiento administrativo en el que se ejerciten potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para el ciudadano.
 - b) No es posible.
 - c) Es posible en los procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se podrá eximir a las personas interesadas de aportar inicialmente cualquier documento mediante la sustitución por una declaración responsable, sin perjuicio de la posterior presentación o acreditación de los documentos en el supuesto de obtener una propuesta de resolución favorable.
 - d) Es posible en cualquier procedimiento administrativo, siempre que el ciudadano presente una declaración responsable, y sin perjuicio de que la aportación de la documentación sea posteriormente requerida discrecionalmente por la Administración.
- 38. En base al contenido del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2021 por el que se aprueba el III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿cuál de las siguientes acciones no está incluida dentro de la medida «Propuestas concretas para fomentar la sensibilización colectiva hacia la igualdad de género»?**
- a) Publicar información sobre el Plan de Igualdad en las redes sociales.
 - b) Elaborar y difundir un banco de buenas prácticas en materia de igualdad.
 - c) Crear un foro para promover el debate e intercambiar conocimientos sobre la igualdad de género.
 - d) Elaborar un material didáctico sobre los estereotipos de género y difundirlo entre todo el personal.

39. En base al contenido del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2021 por el que se aprueba el III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿cuál de las siguientes acciones no está incluida dentro de la medida «Favorecer el acceso de más personas a la formación básica en materia de igualdad y programar formación específica según los colectivos destinatarios»?
- a) Potenciar la formación del personal docente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) en materia de igualdad.
 - b) Publicar información sobre el Plan de Igualdad en las redes sociales.
 - c) Destinar un presupuesto específico para la ejecución de la formación del Plan de Igualdad.
 - d) Modificar la instrucción de selección de personal laboral temporal para incluir la valoración de la formación en materia de igualdad.
40. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Administración General del Estado comprende:
- a) La organización central (que integra los ministerios), la organización territorial (que integra los servicios comunes) y los delegados del Gobierno en las provincias.
 - b) La organización central (que integra los ministerios y los servicios comunes) y la Administración General del Estado en el exterior.
 - c) La organización central (que integra los ministerios y los servicios comunes), la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior.
 - d) La organización central (que integra los ministerios) y la organización territorial (que integra los servicios comunes).
41. Señale la respuesta incorrecta. En cuanto a la Administración local, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución española de 1978:
- a) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
 - b) El gobierno y la administración de los municipios corresponden a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales.
 - c) Se caracteriza por las notas de subordinación y dependencia de la Administración autonómica, por lo que no goza de personalidad jurídica plena.
 - d) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
42. La cláusula de prevalencia del derecho estatal establecida en el artículo 149.3 de la Constitución española de 1978:
- a) Supone que las normas del Estado resultan en todo caso prevalentes (superiores) sobre las de las comunidades autónomas.
 - b) Supone que el Estado puede fijar libremente su propio ámbito de competencia, aun en perjuicio del de las comunidades autónomas.
 - c) No contiene ningún enunciado de superioridad natural del derecho estatal sobre el de las comunidades autónomas y supone la inaplicación de la norma autonómica.
 - d) Supone que las normas del Estado que entren en el ámbito autonómico garantizado por la Constitución se consideran válidas.
43. Los colegios profesionales (por ejemplo, los colegios de médicos o los colegios de abogados):
- a) Son entidades que forman parte de la llamada Administración corporativa representativa de intereses económicos y profesionales.
 - b) Son entidades privadas, sin que en ningún caso puedan ejercer responsabilidades públicas.
 - c) Forman parte de las llamadas administraciones independientes.
 - d) Son entidades que forman parte de la llamada Administración institucional.

44. Señale la respuesta correcta. En relación con la supremacía posicional de la Administración y el principio de autotutela:

- a) La Administración tiene la potestad de hacer ejecutar sus propias decisiones sin tener que contar para ello con la intervención de los tribunales, incluso mediante el empleo de la coacción en caso de resistencia de sus destinatarios.
- b) No cabe afirmar que la Administración tiene una posición de supremacía en las relaciones entre esta y los particulares, pues la Administración, al igual que los sujetos privados, está plenamente sujeta al derecho.
- c) La Administración precisa de la colaboración judicial para emitir cualquier declaración de derechos que altere situaciones jurídicas.
- d) El apremio sobre el patrimonio es la única manifestación legal del poder de autotutela de la Administración (esto es, el único medio de ejecución forzosa previsto en el ordenamiento jurídico).

45. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a) El apoderamiento apud acta realizado por comparecencia electrónica no es un medio válido de acreditación de la representación.
- b) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación.
- c) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
- d) Las personas jurídicas podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas siempre que ello esté previsto en sus estatutos.

46. Las leyes orgánicas:

- a) Pueden regular cualquier materia, incluido el régimen electoral general.
- b) No pueden regular los estados de alarma, de excepción y de sitio.
- c) Con carácter general, se relacionan con las leyes ordinarias en virtud del principio de competencia.
- d) La aprobación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

47. Señale la respuesta correcta. En relación con los reglamentos:

- a) Es un límite a la potestad reglamentaria el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- b) Un reglamento dictado por el órgano incompetente no es ilegal siempre que dicho órgano tenga atribuida potestad reglamentaria para aprobar otras normas de rango reglamentario.
- c) El principio de proporcionalidad no se aplica a la potestad reglamentaria estatal, de modo que la iniciativa normativa podrá contener cualquier regulación para atender a la necesidad a cubrir con la norma.
- d) Los reglamentos no están sometidos a los principios generales del derecho, pues se someten únicamente a estos los actos administrativos.

48. Señale la respuesta incorrecta. En relación con la Administración pública y su organización:

- a) La organización administrativa supone la creación de una auténtica estructura o aparato capaz de desempeñar las funciones atribuidas a la Administración.
- b) La Administración es una organización compleja que realiza diferentes tareas.
- c) El principio de desconcentración es un principio diferenciador del modelo de Administración que sanciona la Constitución española.
- d) La estructura burocrática del personal de la Administración no es un principio informativo de la organización administrativa.

49. Señale la respuesta correcta. En cuanto a la organización administrativa:

- a) No debe contar necesariamente con órganos situados lo más cerca posible del administrado (principio de desconcentración).
- b) La organización de la Administración General del Estado en las unidades territoriales provinciales y autonómicas da lugar a la Administración periférica del Estado.
- c) Las comunidades autónomas no cuentan con una organización administrativa propia.
- d) La Administración local forma parte de la Administración General del Estado.

50. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- a) La racionalización y la agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión es un principio de aplicación a la actuación de las administraciones públicas.
- b) El principio de simplicidad no rige la actuación de las administraciones públicas.
- c) Se excluye la aplicación del principio de cooperación, colaboración y coordinación de las relaciones entre la Administración pública y los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma.
- d) Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan con sometimiento pleno únicamente a los principios generales del derecho.

51. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- a) Tienen la consideración de administraciones públicas la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local, así como los organismos públicos y las entidades de derecho público que integran el sector público institucional.
- b) Las universidades públicas se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015.
- c) La Ley 40/2015 se aplica al sector público institucional, que está integrado, entre otras entidades, por las de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.
- d) Las corporaciones de derecho público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una administración pública, y supletoriamente por la Ley 40/2015.

52. Señale la respuesta correcta en relación con los órganos administrativos:

- a) Todas las unidades administrativas son órganos administrativos directivos.
- b) Pueden crearse sin dotación de créditos necesarios para su funcionamiento.
- c) Pueden crearse sin delimitación de sus funciones.
- d) No puede crearse un nuevo órgano si existe otro en la misma administración con iguales funciones sobre el mismo territorio y población.

53. Señale la respuesta incorrecta en relación con los órganos administrativos:

- a) El acuerdo de creación de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberá ser publicados en el boletín o diario oficial de la administración pública en la que se integran.
- b) Son órganos colegiados aquellos cuya titularidad corresponde a un conjunto de personas físicas ordenadas horizontalmente, de modo que todas ellas concurren, de modo colectivo, a formar la voluntad u opinión del órgano.
- c) La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, entre otros requisitos, la determinación de su forma de integración en la administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- d) No existen órganos unipersonales, pues el titular de un órgano administrativo nunca puede ser una única persona física.

54. Señale la respuesta incorrecta. En relación con las técnicas de alteración del ejercicio de la competencia administrativa:

- a) La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
- b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la misma Administración, deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o las entidades de derecho público intervinientes.
- c) La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante, y para su validez será necesaria su publicación.
- d) En la forma que disponga cada administración pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en los que haya sido declarada su abstención o recusación.

55. En cuanto a la delegación de competencias:

- a) Toda competencia puede ser objeto de delegación, incluso la competencia relativa a la adopción de disposiciones de carácter general.
- b) Los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas únicamente en otros órganos de la misma Administración que sean jerárquicamente dependientes.
- c) Los órganos de la Administración General del Estado no pueden delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes.
- d) En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante.

56. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los conflictos de atribuciones:

- a) Podrán suscitarse entre órganos de distintas administraciones relacionados jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo.
- b) Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración relacionados jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
- c) Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
- d) Podrán suscitarse entre órganos de distintas administraciones relacionados jerárquicamente, y respecto de asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

57. Señale la respuesta incorrecta. En relación con las clases de actos administrativos:

- a) La distinción entre actos que ponen fin o no a la vía administrativa posee significación en relación con la posibilidad de interponer contra los mismos los siguientes recursos administrativos: recurso de alzada o recurso de reposición.
- b) Los actos pueden ser simples o complejos en función del número de entes u órganos que participan en su emisión.
- c) La distinción entre actos administrativos resolutorios y actos administrativos de trámite es relevante, pues los actos de trámite nunca pueden ser impugnados.
- d) Son actos declarativos los que enuncian una situación preexistente, dotándola de eficacia.

58. Señale la respuesta incorrecta. En cuanto a la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio:

- a) En los procedimientos en los que la Administración ejerza potestades sancionadoras se producirá la caducidad.
- b) El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
- c) En el caso de procedimientos de los que pudieran derivarse situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
- d) En los procedimientos en los que la Administración ejerza potestades de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

59. Señale la respuesta incorrecta. En cuanto al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

- a) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
- b) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
- c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- d) La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

- 60. En cuanto al procedimiento administrativo, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:**
- a) La petición razonada de otros órganos administrativos que no tienen competencia para iniciar el procedimiento vincula al órgano competente para iniciarlo.
 - b) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
 - c) Un convenio no puede tener la consideración de acto finalizador de un procedimiento administrativo.
 - d) No cabe la apertura de un período de información o actuaciones previas con anterioridad al inicio del procedimiento.
- 61. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:**
- a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
 - b) Las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
 - c) Las administraciones públicas podrán adoptar en cualquier momento la declaración de lesividad para el interés público de actos anulables favorables para los interesados.
 - d) Las administraciones públicas podrán declarar de oficio la nulidad de actos, entre otros requisitos, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere.
- 62. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:**
- a) Los convenios que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento ponen fin a la vía administrativa.
 - b) Contra los actos firmes en vía administrativa no cabe interponer ningún recurso administrativo.
 - c) El órgano competente para resolver el recurso de alzada es el órgano superior jerárquico del que dictó la resolución o el acto objeto del recurso.
 - d) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición.
- 63. De conformidad con el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, las partes y las personas afectadas podrán instar la ejecución forzosa de la sentencia transcurridos:**
- a) Dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo.
 - b) Tres meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo.
 - c) Seis meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo.
 - d) Ocho meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo.
- 64. Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativas al procedimiento ordinario de elaboración de las disposiciones de carácter general es incorrecta. Según la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears:**
- a) Se podrá prescindir del trámite de información pública en el supuesto de normas organizativas.
 - b) El proyecto de reglamento se someterá preceptivamente al informe de evaluación de impacto de género, en los términos que prevé la normativa sobre igualdad.
 - c) No debe elaborarse una memoria del análisis de impacto normativo, que únicamente se exige para la elaboración de anteproyectos de ley.
 - d) Los trámites de audiencia y de información pública se pueden impulsar de forma simultánea.

- 65. Señale la respuesta incorrecta sobre el procedimiento general de expropiación forzosa. Según la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954:**
- a) Cuando la expropiación implique solo la necesidad de ocupación de una parte de una finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquella resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada, este podrá solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca.
 - b) Las personas que hubieran comparecido en la información pública no son sujetos legitimados para recurrir en alzada el acuerdo de necesidad de ocupación.
 - c) En relación con la expropiación de bienes inmuebles, la utilidad pública puede ser declarada genéricamente por ley.
 - d) El acuerdo de necesidad de ocupación deberá publicarse y notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, si bien en la exclusiva parte que pueda afectarlas.
- 66. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar por responsabilidad patrimonial de la Administración, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, empezará a computarse:**
- a) Desde que se produce la primera visita médica.
 - b) Desde que termina de producirse el daño.
 - c) Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
 - d) Desde que se inicia el daño.
- 67. En relación con la potestad sancionadora de la Administración, señale la respuesta incorrecta:**
- a) Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario.
 - b) Las sanciones administrativas en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
 - c) Solo podrá ser sancionado por hechos constitutivos de infracción administrativa quien resulte responsable de los mismos a título de dolo, pero no de culpa.
 - d) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
- 68. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, tienen la consideración de contratos administrativos:**
- a) Todos los contratos de servicios, suministro y servicios.
 - b) Los contratos de obra siempre que se celebren por una administración pública.
 - c) Los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.
 - d) Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de administraciones públicas.
- 69. Señale la respuesta incorrecta en relación con los procedimientos de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:**
- a) En el procedimiento simplificado abreviado, la oferta se presentará en un único sobre si no se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; en caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres.
 - b) En los procedimientos con negociación, la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos.
 - c) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.
 - d) En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.

- 70. Señale la respuesta correcta en relación con las prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:**
- a) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros requerirán de dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.
 - b) La declaración de la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato no es una prerrogativa de la Administración Pública.
 - c) Los acuerdos relativos a las prerrogativas de la Administración pública en los contratos públicos se adoptan sin audiencia al contratista.
 - d) La determinación de los efectos de la resolución del contrato no es una prerrogativa de la Administración pública.
- 71. Señala la respuesta incorrecta. Los convenios a que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:**
- a) Deben acompañarse de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
 - b) Pueden resolverse por el acuerdo unánime de todos los firmantes.
 - c) Deberán incluir el plazo de vigencia que, con carácter general, no podrá ser superior a un año.
 - d) Deberán incluir mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
- 72. Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas:**
- a) El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión.
 - b) La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales de la Administración no debe ajustarse al principio de rentabilidad.
 - c) Son bienes de dominio público únicamente los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución española de 1978.
 - d) La gestión y la administración de los bienes y los derechos demaniales se ajustará, entre otros, al principio de dedicación preferente al uso privativo frente al uso común.
- 73. La prestación de un servicio público mediante una sociedad de economía mixta:**
- a) Significa que es un servicio que está prestado por un contratista de la Administración que ha recibido algún tipo de subvención pública.
 - b) Es inequívocamente una forma de gestión directa del servicio.
 - c) No está permitida por nuestro ordenamiento.
 - d) Significa que el servicio está prestado por una sociedad en la que concurren mayoritariamente capital público y capital privado, y está considerado como una forma de gestión mixta del servicio.
- 74. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:**
- a) Con carácter general, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva legitima al interesado para entender estimada por silencio administrativo su solicitud de concesión de la subvención.
 - b) Se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, y siempre que así se haya previsto en las bases reguladoras.
 - c) No procede la concesión directa de subvenciones.
 - d) La reformulación de solicitudes puede no respetar los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

- 75. Señale la respuesta incorrecta sobre la justificación de las subvenciones. De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:**
- a) La justificación insuficiente de la subvención es causa de reintegro.
 - b) La acreditación de los gastos podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
 - c) En la rendición de la cuenta justificativa deben incluirse, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
 - d) Con carácter general, el plazo máximo de rendición de la cuenta justificativa es de un año desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
- 76. Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?**
- a) El artículo 17 del Reglamento regula el derecho de rectificación.
 - b) Según el artículo 36 del Reglamento, el responsable consultará a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos en virtud del artículo 35 muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo.
 - c) Según el artículo 82 del Reglamento, toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del Reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
 - d) Según el artículo 83 del Reglamento, al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta, entre otros elementos, la naturaleza de la infracción.
- 77. Los órganos competentes en materia de función pública en la CAIB, según el artículo 4 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears:**
- a) Son órganos ejecutivos, órganos consultivos, órganos de control y órganos de solución de conflictos.
 - b) Son órganos ejecutivos, órganos consultivos y órganos de control.
 - c) Son órganos ejecutivos y órganos de control.
 - d) Son órganos ejecutivos y órganos consultivos.
- 78. Según el artículo 24 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, las leyes de creación de cuerpos y de escalas tienen que determinar, entre otros extremos:**
- a) La denominación, el nivel de titulación y el nivel de retribución.
 - b) La denominación, el nivel de titulación, la definición de las funciones, el nivel de retribución y la regulación de otras cuestiones que necesiten un tratamiento específico, en atención a las peculiaridades funcionales del cuerpo o de la escala.
 - c) La denominación, el nivel de titulación y la definición de las funciones.
 - d) La denominación, el nivel de titulación, la definición de las funciones y el nivel de retribución.
- 79. Según el artículo 66 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el grado personal superior al adquirido se consolida:**
- a) Por la ocupación de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción.
 - b) Por la ocupación de uno o más puestos del nivel correspondiente durante tres años continuados o cuatro con interrupción.
 - c) Por la ocupación de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años y medio continuados.
 - d) Por la ocupación de uno o más puestos del nivel correspondiente durante un año y medio continuado, o dos y medio con interrupción.

80. Según el artículo 126 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, la Administración de la CAIB se ha de dirigir de oficio contra el funcionario, en acción de regreso:

- a) Cuando cause los daños por dolo, culpa o negligencia.
- b) Cuando cause los daños por dolo, culpa o negligencia graves.
- c) Exclusivamente cuando haya cometido una imprudencia temeraria.
- d) Cuando cause los daños exclusivamente por dolo.

81. La Carta Social Europea:

- a) Es una fuente del derecho del trabajo aprobada en el seno de la Comunidad Económica Europea.
- b) Es una fuente del derecho del trabajo aprobada en el seno del Consejo de Europa.
- c) Es una fuente del derecho del trabajo aprobada en el seno de la Comisión Europea.
- d) Es una fuente del derecho del trabajo aprobada en el seno de la Unión Europea.

82. Según el artículo 85 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, los convenios colectivos:

- a) No pueden regular materias de índole económica, pero sí materias de índole laboral, sindical y cualquier materia que afecte a las condiciones de empleo.
- b) Pueden regular exclusivamente materias de índole laboral y sindical.
- c) Pueden regular materias de índole económica, laboral y sindical, pero no cualquier materia que afecte a las condiciones de empleo.
- d) Pueden regular materias de índole económica, laboral y sindical y cualquier materia que afecte a las condiciones de empleo.

83. Según el artículo 14 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, el periodo de prueba:

- a) Tiene una duración máxima de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para los demás trabajadores, salvo que el convenio colectivo establezca una duración menor.
- b) Tiene una duración máxima de seis meses.
- c) Tiene una duración máxima de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para los demás trabajadores.
- d) Tiene una duración máxima de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para los demás trabajadores, salvo que el convenio colectivo establezca otra duración diferente, que puede ser mayor o menor.

84. Según el artículo 6 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores:

- a) Los menores de edad no pueden realizar trabajos nocturnos, pero sí horas extraordinarias.
- b) Los menores de edad no pueden realizar trabajos nocturnos ni horas extraordinarias.
- c) Los menores de edad pueden realizar horas extraordinarias en periodo diurno.
- d) Los menores de edad pueden realizar trabajos nocturnos, pero no horas extraordinarias.

85. Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, los reconocimientos médicos en materia de prevención de riesgos laborales:

- a) Son obligatorios para el trabajador, como regla general.
- b) Son, en todo caso, obligatorios para el trabajador.
- c) Son voluntarios para el trabajador, como regla general.
- d) Son, en todo caso, voluntarios para el trabajador.

86. En materia laboral, en los términos del artículo 149.1.7 de la Constitución española, las competencias asumidas por la Administración laboral:

- a) Lo pueden ser a nivel estatal, autonómico y, en su caso, local.
- b) Lo pueden ser a nivel estatal y, en su caso, autonómico.
- c) Lo pueden ser exclusivamente a nivel local en aquellas comunidades autónomas que tengan transferidas las correspondientes competencias.
- d) Lo son exclusivamente a nivel estatal.

87. El delito de cohecho:

- a) La conducta del particular solo es típica si por su propia iniciativa ofrece y paga una dádiva al funcionario; si el particular paga a solicitud del funcionario, su conducta es atípica.
- b) La solicitud de una dádiva a un ciudadano por parte de un funcionario a cambio de realizar un acto propio de su cargo no es típica de cohecho, que solo abarca los casos en que el acto funcional prometido sea delictivo (por ejemplo, el funcionario que solicita una cantidad a cambio de cometer una prevaricación o una revelación de secretos).
- c) Cuando un funcionario solicita una dádiva de un particular por realizar un comportamiento delictivo, el delito de cohecho se consuma cuando el funcionario efectivamente recibe la dádiva (antes de ese momento solo hay tentativa de cohecho).
- d) El Código penal sanciona como modalidad de cohecho a los funcionarios que aceptan dádivas o regalos «en consideración» a su función, es decir, aunque no sea a cambio de realizar un comportamiento concreto.

88. En relación con el delito de prevaricación administrativa:

- a) En caso de resolución prevaricadora adoptada por un órgano colegiado, incurren en el delito todos los miembros del mismo, incluso aquellos que han formulado voto particular en contra de la resolución.
- b) Solo puede apreciarse este delito en función del contenido sustantivo de la resolución, de modo que no puede dar lugar a prevaricación la omisión de meros trámites procedimentales (por muy relevantes que sean).
- c) El elemento típico de la arbitrariedad de la resolución se entiende como su incompatibilidad completa e incuestionable con el ordenamiento jurídico, de modo que no basta con la mera ilegalidad.
- d) No da lugar a pena de inhabilitación, pena que solo se aplica a la prevaricación judicial.

89. La elaboración de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears debe enmarcarse en:

- a) Un plan a medio plazo, que debe incluir un mínimo de cinco años, con el fin de garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- b) Un plan presupuestario, que debe ser aprobado por el consejero competente en materia de presupuestos.
- c) Un plan presupuestario a medio plazo, que debe incluir un mínimo de tres años, con el fin de garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- d) Un plan presupuestario aprobado en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de las Illes Balears.

90. La responsabilidad de cada Administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria será regulada, en todo caso:

- a) Por los acuerdos que se adopten en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
- b) Por las normas de la Unión Europea.
- c) Por acuerdo del Consejo de Ministros.
- d) Por una ley orgánica.

91. El principio de no afectación significa:

- a) Que los ingresos públicos deben destinarse a satisfacer el conjunto de las obligaciones económicas, a menos que por ley se establezca la afectación a finalidades determinadas.
- b) Que los ingresos públicos están afectados a cada uno de los gastos públicos para los que están previstos.
- c) Que los ingresos públicos deben destinarse siempre a satisfacer el conjunto de las obligaciones económicas.
- d) Que los ingresos públicos no pueden afectar situaciones particulares ya consolidadas.

92. A los efectos de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, integran el sector público estatal:

- a) La Administración General del Estado y el sector público institucional estatal.
- b) Todas las administraciones públicas españolas.
- c) Exclusivamente la Administración General del Estado y la Administración local.
- d) Las Cortes Generales, los parlamentos autonómicos y todas las administraciones públicas españolas.

93. Disfrutarán del mismo tratamiento que la ley establece para la Administración del Estado con respecto a las prerrogativas, a la inembargabilidad de los bienes y derechos, y a los beneficios fiscales:

- a) La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
- b) La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los organismos autónomos y el resto de entidades que integran el sector público administrativo de la Comunidad Autónoma.
- c) La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las administraciones insulares y las administraciones locales de las Illes Balears.
- d) La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los organismos autónomos y el resto de entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma.

94. La aprobación de los planes de reequilibrio, económico-financieros o de ajuste que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de equilibrio patrimonial y de deuda pública, de acuerdo con la Ley de finanzas y la normativa básica estatal, es competencia:

- a) De la Sindicatura de Cuentas.
- b) Del Consejo de Gobierno.
- c) De la Intervención General.
- d) Del Parlamento.

95. El plan presupuestario a medio plazo, que se incluirá en el programa de estabilidad que elabore el Gobierno del Estado, y la regla del gasto, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, debe ser aprobado:

- a) Por el consejero competente en materia de presupuestos.
- b) Por el Gobierno de las Illes Balears.
- c) Por la Intervención General.
- d) Por el Parlamento.

96. No constituirán gasto computable a los efectos de la regla de gasto del artículo 34 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de las Illes Balears:

- a) Los intereses del endeudamiento y el resto de gastos a que se refiere el artículo 12 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, incluidas las transferencias vinculadas al sistema de financiación de los consejos insulares.
- b) Todos los gastos son computables, sin excepción.
- c) Únicamente las transferencias a los consejos insulares.
- d) Únicamente los intereses del endeudamiento a que se refiere el artículo 12 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, incluidas las transferencias vinculadas al sistema de financiación de los consejos insulares.

97. El principio de especialidad cuantitativa significa:

- a) Que todos los créditos deben destinarse a la finalidad específica para la que han sido autorizados.
- b) Que los créditos consignados en el estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears no tienen carácter limitativo y, en consecuencia, es posible autorizar gastos por una cuantía superior al importe de dichos créditos.
- c) Que los créditos consignados en el estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tienen carácter limitativo y, en consecuencia, no es posible autorizar gastos por una cuantía superior al importe de dichos créditos.
- d) Que los créditos para gastos deben destinarse a cubrir necesidades de financiación.

98. En caso de prórroga de la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:

- a) Un decreto del Gobierno de las Illes Balears determinará las particularidades presupuestarias y contables inherentes a la prórroga presupuestaria.
- b) Una orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos determinará las particularidades presupuestarias y contables inherentes a la prórroga presupuestaria.
- c) La prórroga presupuestaria se decide en sede parlamentaria.
- d) Las particularidades presupuestarias y contables inherentes a la prórroga presupuestaria vendrán establecidas en el acuerdo de prórroga de los presupuestos generales.

99. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Todas las modificaciones presupuestarias deben efectuarse mediante la aprobación de una ley.
- b) Únicamente los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito deben ser aprobados por ley.
- c) La regulación de las normas generales de tramitación de las modificaciones presupuestarias debe efectuarse por orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
- d) Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar los expedientes de ampliación de crédito.

100. La tramitación de un crédito extraordinario o de un suplemento de crédito solo será posible cuando:

- a) Por razones de urgencia e interés público deba efectuarse un gasto inaplazable hasta el ejercicio siguiente y siempre que lo apruebe el Consejo de Gobierno previa autorización parlamentaria.
- b) El presupuesto se encuentre prorrogado.
- c) Por razones de urgencia e interés público deba efectuarse un gasto inaplazable hasta el ejercicio siguiente.
- d) Por razones de urgencia e interés público deba efectuarse un gasto inaplazable hasta el ejercicio siguiente y siempre que lo apruebe el Consejo de Gobierno previa autorización del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas.

101. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las funciones de ordenador general de los pagos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los organismos autónomos y del resto de entidades integrantes de la hacienda pública autonómica corresponden al director general competente en materia de tesorería.
- b) Le corresponden siempre al director general competente en materia de tesorería las funciones de ordenador general de los pagos de todo tipo de consorcios.
- c) La disposición material de los pagos debe efectuarse necesariamente siempre con la firma del director general competente en materia de tesorería.
- d) Únicamente le corresponden al director general competente en materia de tesorería las funciones de ordenador general de los pagos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

- 102. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:**
- a) El presupuesto se cerrará el día 31 de diciembre solo por lo que respecta a los derechos liquidados.
 - b) El presupuesto de cada ejercicio se cerrará, en cuanto al reconocimiento de derechos y de obligaciones, el día previsto en la propia Ley de presupuestos.
 - c) El presupuesto se cerrará el día 31 de diciembre solo por lo que respecta a las obligaciones reconocidas.
 - d) El presupuesto de cada ejercicio se cerrará, en cuanto al reconocimiento de derechos y de obligaciones, el día 31 de diciembre de cada ejercicio, siempre que se correspondan con ingresos liquidados y con gastos realizados hasta el día 31 de diciembre del mismo ejercicio.
- 103. Respecto del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, es cierto:**
- a) Que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears puede recurrir al endeudamiento de acuerdo con lo previsto, exclusivamente, en el artículo 132 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears.
 - b) Que para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para emitir deuda pública es necesario, en todo caso, la autorización del Estado.
 - c) Que para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para emitir deuda pública es necesario, en todo caso, la autorización del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas.
 - d) Que el importe máximo de variación del saldo de deuda viva del ejercicio viene fijado únicamente en la ley de presupuestos generales de cada año.
- 104. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- a) Los criterios de interpretación de las normas tributarias, dado su carácter económico, son distintos de los criterios de interpretación del Código civil.
 - b) Debe establecerse por ley el establecimiento de presunciones que no admitan prueba en contrario.
 - c) La relación jurídico-tributaria es idéntica a la obligación tributaria de pago.
 - d) Cualquier regulación de un tributo debe establecerse por ley.
- 105. Las liquidaciones tributarias:**
- a) En ningún caso deben ser motivadas.
 - b) Los supuestos en los que no será preceptiva su notificación expresa se determinarán siempre por una norma de rango legal.
 - c) Deben ser notificadas siempre y en todo caso, sin excepciones.
 - d) Los supuestos en los que no será preceptiva su notificación expresa podrán establecerse reglamentariamente.
- 106. Respecto de la recaudación tributaria, es cierto afirmar:**
- a) Que el inicio del periodo ejecutivo no determina automáticamente la exigencia de intereses de demora ni de los recargos del periodo ejecutivo.
 - b) Que puede realizarse en periodo voluntario y en periodo ejecutivo. En este segundo caso, solo a través del procedimiento administrativo de apremio.
 - c) Que consiste en el ejercicio de funciones administrativas y judiciales conducentes al cobro de las deudas tributarias.
 - d) Que puede realizarse en periodo voluntario y en periodo ejecutivo. En este segundo caso, tanto mediante pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario como, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio.
- 107. Los límites a los que está sometida la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el establecimiento de sus propios impuestos son una manifestación:**
- a) Del principio de suficiencia financiera.
 - b) Del principio de autonomía financiera.
 - c) Del principio de territorialidad.
 - d) Del principio de legalidad.

- 108. Para que una administración pública pueda declarar nulo un acto tributario dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio:**
- a) Solo lo puede hacer previa declaración de lesividad del acto.
 - b) Tendrá que resolver en el plazo máximo de tres meses.
 - c) Tiene que adoptar la resolución antes de que transcurran cuatro años desde la notificación del acto.
 - d) Requiere un dictamen favorable previo del Consejo de Estado o del órgano equivalente de la respectiva comunidad autónoma.
- 109. La Junta Superior de Hacienda es el órgano competente para conocer y resolver las impugnaciones en vía económico-administrativa. ¿En relación con qué materia?**
- a) Los actos de aplicación de los tributos propios.
 - b) Los actos de aplicación de todos los tributos recaudados en las Illes Balears.
 - c) Los actos de aplicación de los tributos propios y de los tributos cedidos.
 - d) Únicamente puede conocer de los asuntos dictaminados previamente por el Consejo Consultivo de las Illes Balears.
- 110. La función interventora tiene por objeto:**
- a) Realizar el control financiero para promover la mejora de las técnicas y de los procedimientos de gestión económico-financiera.
 - b) Controlar, antes y después de su aprobación, todos los actos que puedan dar lugar al reconocimiento de derechos o de obligaciones de contenido económico, así como los cobros y los pagos que de estos se deriven, y la inversión y la aplicación en general de los fondos públicos y las modificaciones presupuestarias, para asegurar que estos actos se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso.
 - c) Controlar, antes de su aprobación, todos los actos que puedan dar lugar al reconocimiento de derechos o de obligaciones de contenido económico, así como los cobros y los pagos que de estos se deriven.
 - d) Controlar, antes de su aprobación, todos los actos que puedan dar lugar al reconocimiento de derechos o de obligaciones de contenido económico, así como los cobros y los pagos que de estos se deriven, y la inversión y la aplicación en general de los fondos públicos y las modificaciones presupuestarias, para asegurar que estos actos se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso.
- 111. Se encuentran incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:**
- a) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas o dependientes de estas, salvo las universidades públicas.
 - b) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social participen, directamente o indirectamente, administraciones públicas en al menos un 20 %.
 - c) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo.
 - d) La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, quedando excluidas, por tanto, las entidades que integran la Administración local.
- 112. Según el artículo 115 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, los derechos de huelga y al planteamiento de conflictos colectivos:**
- a) Se reconocen al personal funcionario de la CAIB y al personal eventual, pero no al personal interino.
 - b) Se reconocen al personal funcionario de la CAIB, al personal interino y al personal eventual.
 - c) Se reconocen al personal funcionario de la CAIB y al personal interino, pero no al personal eventual.
 - d) Se reconocen al personal funcionario de la CAIB, pero no al personal interino ni al personal eventual.

- 113. Según el artículo 3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, la costumbre:**
- a) Es fuente supletoria del derecho del trabajo, a no ser que cuente con una recepción o remisión expresa.
 - b) Es fuente supletoria del derecho del trabajo.
 - c) Es fuente directa del derecho del trabajo que actúa como norma mínima.
 - d) No es fuente del derecho del trabajo.
- 114. Por lo que respecta a la compatibilidad entre sanción penal y sanción administrativa:**
- a) El principio non bis in idem no tiene ninguna operatividad respecto de la compatibilidad entre sanción penal y administrativa, puesto que solo opera en la relación entre infracciones penales.
 - b) La Administración ha de sancionar en primer lugar si los hechos son constitutivos de infracción administrativa, sin perjuicio de dar posteriormente traslado a la jurisdicción penal si entiende que pueden ser constitutivos de delito.
 - c) Son incompatibles si recaen sobre los mismos hechos.
 - d) Son compatibles si recaen sobre los mismos hechos, pero obedecen a distinto fundamento.
- 115. Según el artículo 2 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, los principios informadores de la función pública de la CAIB son los siguientes:**
- a) Legalidad, objetividad y neutralidad, servicio a la ciudadanía y eficacia.
 - b) Legalidad, objetividad y neutralidad, servicio a la ciudadanía, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión.
 - c) Legalidad, objetividad y neutralidad y servicio a la ciudadanía.
 - d) Legalidad, objetividad y neutralidad, servicio a la ciudadanía, eficacia y eficiencia.
- 116. Según el artículo 62 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la carrera profesional del personal funcionario se hace efectiva:**
- a) A través de la carrera profesional horizontal, de la consolidación del grado personal, de la promoción interna y de la movilidad.
 - b) A través de la carrera profesional horizontal, de la consolidación del grado personal y de la promoción interna.
 - c) A través de la carrera profesional horizontal y de la consolidación del grado personal.
 - d) A través de la carrera profesional horizontal.
- 117. Los reglamentos:**
- a) Siempre tienen su fundamento en una delegación legislativa del Parlamento, de modo que si esta no existe no cabe aprobar la norma reglamentaria.
 - b) No pueden modificar un real decreto legislativo, pues los reglamentos son normas de rango inferior.
 - c) Se consideran actos administrativos, pues los dicta la Administración.
 - d) En el ámbito local se denominan reales decretos.
- 118. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria:**
- a) La liquidación tributaria es el acto de trámite que permite cuantificar la obligación tributaria.
 - b) La liquidación tributaria, por su propia naturaleza, solo puede ser definitiva.
 - c) La Administración tributaria está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones o comunicaciones.
 - d) La liquidación tributaria es el acto resolutorio que determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a compensar o a devolver.

119. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las comunicaciones entre los órganos, las unidades administrativas y los entes públicos incluidos en el ámbito de aplicación de dicho Decreto, se realizarán:

- a) Indistintamente mediante medios electrónicos y comunicaciones en papel.
- b) Siempre mediante comunicaciones en papel, y a través del registro.
- c) Preferentemente por medios electrónicos.
- d) Preferentemente mediante comunicados en papel.

120. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:

- a) La insuficiencia de crédito es causa de nulidad de la resolución de concesión de la subvención.
- b) El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión o disfrute de la subvención.
- c) La resolución de concesión de la subvención es anulable en caso de que se dicte por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
- d) La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.